

OPINIÓN

Salud en abandono: ¿quién responde por los costos del paro de la APS?

Dr. Fernando Carvajal
Encina
Presidente Colegio Médico
La Serena

Señor Director.

El prolongado paro de la Atención Primaria de Salud (APS) en La Serena, que ya va a alcanzar las 8 semanas, refleja una preocupante incapacidad de las autoridades responsables para dar solución a un conflicto que afecta a más de

160.000 personas que dependen de los consultorios municipales para acceder a servicios esenciales de salud.

La APS es la base del sistema de salud en nuestro país. Su rol va mucho más allá de atender consultas médicas: contribuye a la prevención de enfermedades, el manejo oportuno de condiciones crónicas y el fortalecimiento del bienestar comunitario. Cualquier interrupción en estos servicios tiene consecuencias que se agravan con el tiempo, especialmente en los sectores más vulnerables de la población.

Si bien se han mantenido las atenciones de urgencia (médicas, dentales y de salud mental), la entrega de medicamentos, vacunaciones, controles de embarazo y atenciones de recién nacidos, esta paralización implica la suspensión de más de mil atenciones médicas al día, a lo que deben sumarse las otras atenciones que realizan los equipos de salud, como visitas domiciliarias, atención de pacientes

desmovilizados, entre otros.

Es imperativo que las autoridades municipales cumplan con sus responsabilidades y actúen de manera decidida para resolver este conflicto, asegurando el normal funcionamiento de la APS. Del mismo modo, el ministerio y los servicios de salud no pueden mantenerse al margen de una crisis que impacta de manera tan directa en la población. Aunque la administración de la APS de la comuna de La Serena recae en la corporación municipal, el Estado tiene el deber de velar por el derecho a la salud y garantizar que las y los ciudadanos no queden desprotegidos.

Desde el Colegio Médico La Serena hacemos un llamado a todas las autoridades involucradas a asumir su responsabilidad y realizar todas las gestiones que sean necesarias para destrabar este conflicto, poniendo como prioridad la salud y el bienestar de la comunidad, ya que no podemos permitir que las y los pacientes sigan pagando el costo de la inacción.